

Fracaso económico



ELCOMERCIO.PE

Con las últimas medidas económicas, el Gobierno nacional parece estar más interesado en que se profundice el caos y la crisis; no existe una respuesta consistente a la grave situación que está viviendo el país. Las decisiones que permitan ayudar a superar este momento no terminan de llegar

El lunes 20 de agosto inició la segunda reconversión del bolívar en tan solo una década. Esto es suficiente para poder decir que algo, o muchas cosas, no se han hecho bien. Hace diez años se prometía una moneda “fuerte”, pero ahora se ha dejado la fuerza para abrirle el paso al sueño de que nuestra moneda será finalmente “soberana”. En cualquier caso y con cualquier nombre, hacen falta muchas más acciones que la eliminación de cinco ceros para hacerle frente a la hiperinflación, una realidad que hace mermar la capacidad de subsistencia de la gran mayoría de las familias.

En los días previos a la entrada en vigencia de la nueva moneda, se presentaron dinámicas que incrementaban el caos. No

solamente había confusión sobre los modos en que se aplicaría la medida, sino que también en muchos lugares se dejaban de aceptar billetes que oficialmente estaban en circulación, pero por su baja denominación era engorroso manejarlos; o lugares en los que simplemente no se aceptaba la realización de transferencias electrónicas o pagos por puntos de venta, permitiendo como único medio de pago, el escaso efectivo.

La crisis no solo se hacía evidente por las dinámicas propias de una decisión que careció de un proceso de adaptación y familiarización al nuevo con monetario, sino que el Gobierno nacional fue claramente tendencioso a potenciar el caos cuando anunció un nuevo paquete de medidas para reactivar

la economía que denominó “Plan de recuperación económica”. Entre otros anuncios tenemos el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 16 % y, tal vez, la más polémica de todas fue el aumento del salario mínimo en un 5.900 %, una cifra descomunal que fue asumida con pánico, ya que para muchas empresas, industrias y comercios será imposible responder con sus obligaciones laborales, lo que seguramente incidirá, además, en el aumento desmesurado de los costos de todos los bienes y servicios. En fin, una decisión que traerá más empobrecimiento y una sociedad más clientelar y dependiente del Estado.

Las medidas anunciadas por Maduro han dado pie para que automáticamente desaparecieran de las cadenas de supermercados, mercados municipales y abastos, las carnes rojas, el pollo y gran cantidad de víveres. El miedo de los comerciantes y distribuidores es vender los productos a un precio “viejo” que les imposibilitará reponer las mercancías cuando deban adquirirlas al precio “nuevo”; por ello, muchos decidieron no despachar sus productos o no colocarlos a la venta.

Por su parte el Gobierno, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ha tomado algunas medidas puntuales con comercios, tal fue el caso de la cadena de farmacias de autoservicio Farmatodo, que fue obligada a ajustar sus precios en todas sus tiendas a nivel nacional, luego que se recibieran denuncias sobre supuestos “aumentos indiscriminados de productos”, y se le acusara de estar incurriendo en delitos de “especulación y remarcaje de precios”. La medida permitió la llegada de centenares de clientes que aprovecharon la situación, dejando al final el panorama de unos establecimientos prácticamente vacíos, con pérdidas y dificultades para reponer la mercancía.

ATENTADO

El sábado 4 de agosto, en el acto de conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional, el presidente Nicolás Maduro daba un discurso en el que llamaba al inicio de la “recuperación económica” cuando se escucharon dos explosiones que quedaron registradas en el audio de la cadena nacional de radio y televisión. Inmediatamente después, las imágenes dejaron de enfocar al Presidente y mostraron el momento en que el desfile militar rompe sus filas y corre en estampida, allí termina la cadena nacional.

A las horas de haberse presentado esta situación, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que luego de todo un trabajo de investigación se pudo determinar que se trató de un “atentado en contra de la figura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien para tranquilidad de todas y de todos ha resultado completamente ileso”. Explicó el ministro que se utilizaron dos “artefactos voladores tipo dron que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile”.

Por supuesto, en medio del clima político que vivimos y el irrenunciable discurso por parte del Gobierno sobre la amenaza latente de invasión al país, el ministro Rodríguez aseguró que detrás del atentado están los sectores de la “ultraderecha” que han “fracasado” luego de este atentado y que Maduro “protege a todo el pueblo”. En ese mismo orden se pronunció el presidente Maduro quien detalló que están recabando todas las pruebas que demuestran la participación de personas “residenciadas en la Florida, Estados Unidos y Colombia”. Asimismo, explicó que los autores materiales del atentado fueron entrenados en Colombia y aseguró que algunos de sus detractores políticos están involucra-

dos en este hecho. Acusó directamente a los dirigentes de Primero Justicia (PJ) Julio Borges y Juan Requesens, y al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

No obstante, se han expresado diversas voces, entre ellas los partidos de oposición, que han puesto en duda la veracidad del atentado, diciendo que responde más a una estrategia de vieja data que ha utilizado el Gobierno para reforzar y justificar sus acciones de represión y persecución selectivas, además de ser una “cortina de humo” para desviar la atención en un contexto país álgido, con una población que busca por todos los medios sobrevivir. Al final de las palabras del discurso pronunciado por Maduro se dejaban ver sus costuras autoritarias y personalistas: “Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?... nadie [...] el destino nos depara grandes momentos, grandes triunfos...”

FURIA CONTRA REQUESENS

El diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin respetar su inmunidad parlamentaria, luego de que el presidente Maduro lo acusara de estar involucrado en



Juan Requesens.

NOTICIERO VENEZOLANO

el fallido “atentado” en su contra. Dos días después de su detención, el ministro Rodríguez transmitió un video del interrogatorio que le hicieron a Requesens, sin la presencia de sus abogados y sin haber sido presentado ante los tribunales, donde este afirmaba que colaboró con Julio Borges para pasar por la frontera hacia Colombia a Juan Monasterio, acusado de organizar el supuesto atentado en contra de Maduro.

Luego que el ministro presentara a la opinión pública la supuesta declaración, comenzó a circular por las redes sociales un video en el que aparece el mismo diputado Requesens, ahora semidesnudo, con su ropa manchada de lo que parece excremento, las pupilas dilatadas y siguiendo una serie de órdenes. Los dos videos dieron pie a la especulación; la versión de la oposición —que pareciera ser la más creíble— es que Requesens se encontraba bajo los efectos de químicos y de amenazas que le hicieron declarar lo que el Gobierno quería que se dijese.

Para Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general, la incriminación que hace Requesens en los videos es producto de “la tortura psicológica y física” a la que ha sido sometido en la sede del Sebin. Califica, además, de “desastrosa” esta manera de proceder.

Por su parte, fue tal la polémica y el impacto que produjeron los dos videos de Requesens, que el presidente Maduro se pronunció al respecto afirmando que el video se realizó durante la revisión médica en el Sebin y que el mismo no debió haber salido a la luz pública porque era un material privado y que por eso ordenó una investigación para determinar lo sucedido.

EL CARNET DEL CHANTAJE

El Gobierno nacional se está apoyando cada vez más en el llamado “carnet de la patria” a través del cual se garantiza el



MIPPCI

acceso a la población a determinados subsidios, bonos y servicios. Este instrumento digital es similar a un documento de identidad, pero ha sido criticado por grupos opositores y organizaciones no gubernamentales que aseguran que con su uso el Gobierno busca asegurarse el control de la población, y lo comparan a la “cartilla de racionamiento” que se utiliza en Cuba. En este sentido, más que instrumento de identidad, es una herramienta que permite el chantaje y la discriminación política, que juega con las necesidades de las personas y las obliga a buscar los subsidios que provienen de la vía gubernamental.

De hecho, a medida que se recrudece la crisis que está atravesando el país, se han presentado mayores programas y subsidios a los que se accede a través del carnet, forzando a la población a tener que sacarlo para sobrevivir y a depender cada vez más del Gobierno. El rango de acción del carnet se va ampliando, sus beneficios incluyen el acceso a bonos (dinero); a planes como “parto humanizado” en el que se da una suma determinada de dinero para aquellas mujeres que están embarazadas; o el acceso a las cajas de comida CLAP, el pago del transporte público y el metro de Caracas.

NUEVA POLÍTICA CON LA GASOLINA

El 14 de agosto Maduro anunció el fin del actual sistema de subsidios a la gasolina que venía aplicándose desde hace décadas y que permitía contar con el precio de la gasolina más barata del mundo. La nueva política viene enmarcada en el Plan de Recuperación Económica y prevé que los usuarios pagarán la gasolina a precio internacional, a menos que se hayan inscrito en el llamado “censo nacional automotor” y posean el carnet de la patria; en este caso el precio sería subsidiado. No obstante, muchos sectores han criticado la medida argumentando que, en la actual coyuntura del país, los nuevos precios de la gasolina serían impagables y que se evidencia la tendenciosa medida de control a través del carnet de la patria.

Según el Gobierno, el plan se iniciará con una fase de prueba durante quince días en los municipios de los estados fronterizos, y afirma que con esta medida se quiere evitar el contrabando de la gasolina hacia Colombia. De hecho, se prevé que el precio de venta de la gasolina en toda la línea fronteriza será superior al que se oferta en Colombia.